encerrada y confinada en la vigésima parte, aproximadamente, del total de la superficie terrestre, con una densidad media de más de 150 personas por kilómetro cuadrado. "Un análisis detallado revela que las zonas más densamente pobladas del mundo son China, India, Pakistán, Europa, Japón e Indonesia. En contraste con esto existen vastos territorios que poseen poblaciones mucho menos densas y que están situadas, sobre todo, en las regiones centrales de los continentes, encontrándose, por tanto, a cierta distancia del océano. Estas zonas poco pobladas comprenden Siberia, parte de Africa Central y de América del Sur, las partes centrales y septentrionales de América del Norte, partes de Australia y muchas islas del Pacífico". Esta desigualdad de la población —agrega— en relación con la superficie del territorio y sus recursos inherentes, constituye un problema formidable de diferenciación económica

que justifica todas las tensiones internacionales que le acompañan.

Es sorprendente la facilidad con que, a partir de este punto, examina el autor las complejas circunstancias en que se encuentran los países superpoblados y de escaso desarrollo económico, en cuanto se refiere al nivel de vida de los habitantes. Todo el razonamiento, magistralmente complementado con datos estadísticos de inocultable importancia, lleva a probar cómo subsisten en el mundo pueblos enteros con hambre y extensos territorios, aptos para la agricultura tecnificada, totalmente despoblados. Es un libro altamente recomendable, que por los temas que plantea merece la atención de economistas y sociólogos.

JAIME DUARTE FRENCH

DETERMINACIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL BANCO DE LA REPUBLICA

La junta directiva del Banco de la República,

en ejercicio de las atribuciones conferidas por los decretos legislativos 1337 de 1952 y 3027 de 1953,

RESUELVE:

Artículo 1º El cupo ordinario de crédito del Banco Popular para sus operaciones de préstamos y descuentos en el instituto emisor, se determinará así:

Sobre los primeros cuatro millones (\$ 4.000.000) de su capital y reserva legal, el ciento cincuenta por ciento (150%), y

Sobre el resto de su capital y reserva legal, el ciento veinte por ciento (120%).

Artículo 2º La tasa mínima de interés del Banco de la República para las operaciones de préstamo, descuento y redescuento con el Banco Popular, será del cuatro por ciento (4%) anual, excepto cuando se trate de obligaciones garantizadas con prenda agraria o industrial, en cuyo caso será del tres por ciento (3%) anual.

Artículo 3º Para que las obligaciones sean admisibles, el Banco Popular no podrá cobrar un interés mayor del doce por ciento (12%) anual.

Artículo 4º Sin perjuicio de las condiciones especiales que rigen las operaciones de fomento económico autorizadas por los decretos legislativos 384 de 1950 y 198 de 1957, el Banco Popular podrá emplear su cupo ordinario de crédito con un margen de utilidad inferior en dos (2) puntos al interés estipulado en la respectiva obligación.

Artículo 5º El término de los documentos presentados al descuento o como garantía de los préstamos que otorgue el Banco de la República al Banco Popular, no podrá exceder de un (1) año, contado desde la fecha del descuento o del préstamo, siempre que correspondan a obligaciones con anterioridad a la fecha de la presente resolución.

Para los documentos presentados en el futuro, solamente serán admisibles al Banco Popular aquellos cuyo plazo esté ajustado a las normas vigentes para los bancos afiliados.

Parágrafo. Es entendido que de acuerdo con la resolución de fecha 25 de septiembre de 1957 de la junta directiva del Banco de la República, dictada

con base en la facultad que le concede el artículo 2º del decreto legislativo 222 de 1957, el Banco Popular no podrá descontar ni recibir en garantía de préstamo, letras de cambio con un plazo superior a noventa (90) días. Dicha disposición se aplica, asimismo, a letras que correspondan a renovaciones de esta clase de documentos.

Artículo 6º El cupo extraordinario del Banco Popular será el mismo señalado para los bancos afiliados mediante la resolución de 11 de mayo de 1951, equivalente al cincuenta por ciento (50%) de su

capital y reserva legal, aplicable solo en casos extraordinarios, con carácter temporal y sin ningún margen de utilidad.

Mientras el Banco Popular utilice este cupo, no podrá aumentar su cartera ni los sobregiros.

Artículo 7º Esta resolución rige desde su fecha y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

Dada en Bogotá, a 15 de noviembre de 1957.

DECRETOS DEL GOBIERNO NACIONAL

DISPOSICIONES EN RELACION CON EL CONVENIO CAFETERO DE MEXICO

DECRETO LEGISLATIVO 281 DE 1957

(octubre 30)

por el cual se dictan disposiciones en relación con el Convenio Cafetero de México.

La Junta Militar de Gobierno de Colombia,

en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 121 de la Constitución Nacional, y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el Convenio de Regulación de Exportaciones de Café, firmado en México el 18 de octubre de 1957, correspondió a Colombia una exportación máxima de **dos millones trescientos dos mil sacos (2.302.000)** de café de 60 kilos, entre el 1º de noviembre de 1957 y el 31 de marzo de 1958,

DECRETA:

Artículo 1º La cuota de exportación de café de Colombia fijada en el convenio de octubre de 1957, de México, y las cuotas que se fijen con posterioridad, serán cubiertas por los exportadores colombianos en proporción a las exportaciones que hubieren efectuado en los tres últimos años cafeteros, según los registros llevados por la Federación Nacional de Cafeteros. La gerencia de la Federación dicha fija-

rá, por medio de resolución, las cuotas individuales que correspondan a los exportadores colombianos y dará cuenta de ellas a los interesados, al Ministerio de Hacienda y a la Oficina de Registro de Cambios.

Artículo 2º Si se efectuaren modificaciones en el Convenio de Regulación de Exportaciones, el Comité Nacional y la Gerencia de la Federación Nacional de Cafeteros, podrán ajustar las cuotas de exportación prefijadas.

Artículo 3º La Federación Nacional de Cafeteros podrá ceder de su propia cuota, las cantidades de café que estime convenientes, a los exportadores que agotaren la que les corresponde.

Artículo 4º Ninguna persona distinta de las determinadas en este decreto, podrá exportar café colombiano. Al exportador autorizado que excediere la cuota de exportación concedida, se le cancelará la licencia de exportación, por tiempo no inferior a cinco (5) años.

Artículo 5º La retención del 10% del café colombiano a que se refiere el Convenio de México, la efectuará la Federación Nacional de Cafeteros.

Artículo 6º El presente decreto rige desde la fecha de su expedición.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, a 30 de octubre de 1957.

Mayor General GABRIEL PARIS G.,
Presidente de la Junta.

Mayor General DEOGRACIAS FONSECA
Contraalmirante RUBEN PIEDRAHITA ARANGO
Brigadier General RAFAEL NAVAS PARDO
Brigadier General LUIS E. ORDOÑEZ

(Siguen las firmas de los Ministros del Despacho).

NORMAS PARA EL FOMENTO AGROPECUARIO

DECRETO LEGISLATIVO 290 DE 1957

(noviembre 8)

por el cual se dictan normas para el fomento agropecuario.

La Junta Militar de Gobierno de la República
de Colombia,

de conformidad con los artículos 30 y 32 de la
Constitución Nacional y en uso de las facultades
que le confiere el artículo 121 de dicha Constitución, y

CONSIDERANDO:

Que la explotación de gran parte de los predios
rurales del país es inadecuada;

que se presenta una deficiencia en la producción
de artículos de primera necesidad para mantener
un nivel de vida adecuado al pueblo colombiano;

que se importan gran cantidad de materias primas
derivadas de la agricultura y la ganadería que pue-
den producirse económicamente en el país, y

que el Estado está en la obligación de tomar las
medidas necesarias para el incremento de la agri-
cultura y la ganadería,

DECRETA:

Artículo 1º Para la debida explotación económica
de los predios rurales, el gobierno procederá a la
clasificación de las tierras del país, en la forma que
adelante se indica.

Artículo 2º El territorio nacional será clasificado
de acuerdo con los siguientes tipos básicos:

Tipo I— Que corresponde a las tierras:

a) Planas o aptas para trabajo con tractores;

b) Sin peligro de erosión por trabajo con equipo
mecánico.

Dichas tierras deben ser cultivables y apropiadas
para la agricultura en su estado y ser accesibles a
sistemas de transporte público.

Tipo II— Que corresponde a las tierras:

a) No aptas para trabajo con tractores; o

b) Con peligro de erosión pero controlable por
prácticas de cultivo.

Dichas tierras deben ser cultivables y apropiadas
para la agricultura en su estado actual y ser acce-
sibles a sistemas de transporte público.

Tipo III— Que corresponde a tierras actualmente
inapropiadas para cultivos agrícolas, pero que pue-
den ser potencialmente cultivables y apropiadas, ya
sea como tipo I o II, mediante las mejoras que se
introduzcan, por medio de drenajes, irrigaciones,
desmontes, o construcción de vías de acceso a siste-
mas de transporte público.

Tipo IV— Que corresponde a las demás tierras,
tales como erosionadas, escarpadas, inundadas, etc.

Artículo 3º Créase a partir de la fecha del pre-
sente decreto como organismo autónomo descentra-
lizado, el "Instituto Geográfico Agustín Codazzi",
con las funciones que le asignaron los decretos nú-
meros 786 de 1953 y 1628 de 1956.

Las dependencias del Catastro Nacional que fue-
ron adscritas a la Jefatura de Rentas e Impuestos
Nacionales, por medio del Decreto número 867 de
1956, y las que de conformidad con la misma norma
pasaron a formar parte del Ministerio de Guerra,
pasarán a ser dependencias del Instituto Geográfico
Agustín Codazzi.

El Gobierno queda autorizado para reorganizar,
hacer los traslados presupuestales necesarios y re-
glamentar el funcionamiento del Instituto a fin de
orientarlo al estudio, reconocimiento y consiguiente
clasificación y avalúo catastral de las tierras del
país, por razón de la mayor o menor utilización
agropecuaria que se les pueda dar, de acuerdo con
la clasificación de que trata el artículo 2º de este
decreto.

Parágrafo 1º El Instituto dará preferencia a la
clasificación de carácter general de los terrenos más
aptos para explotación agropecuaria, sin perjuicio
de que simultáneamente adelante la clasificación de-
tallada de las distintas regiones del país.

Parágrafo 2º El Instituto Geográfico Agustín Codazzi señalará las zonas que por su avanzada erosión deben ser desocupadas y destinadas a reforestación progresiva. El Gobierno Nacional, a medida que las circunstancias fiscales lo permitan, adquirirá esas tierras y facilitará el establecimiento de sus moradores en otras regiones del país. A falta de acuerdo con los propietarios sobre el precio de las tierras erosionadas, estas podrán ser expropiadas. En todo caso, el Gobierno podrá ofrecer en pago tierras para el establecimiento de los campesinos.

Artículo 4º El Instituto Geográfico Agustín Codazzi estará dirigido por un comité ejecutivo compuesto por el ministro de hacienda quien lo presidirá, por los ministros de guerra y de agricultura, y por el director del Instituto, quienes se reunirán no menos de una vez al año, nombrarán el director del instituto y señalarán y aprobarán los programas de trabajo y presupuesto de gastos.

Tendrá además una junta administradora compuesta por:

- a) El director del instituto;
- b) Un delegado del Ministerio de Hacienda;
- c) Un delegado del Ministerio de Guerra;
- d) Un delegado del Ministerio de Agricultura, escogido de terna que presentará la Sociedad de Agricultores de Colombia.

Parágrafo 1º Los jefes de departamentos que designe el comité ejecutivo, tendrán voz en la junta administradora.

Parágrafo 2º Deróganse los Decretos legislativos números 259 de 1954, 2061 de 1954, 867 de 1956, 1753 de 1956, 4 de 1957 y demás disposiciones que sean contrarias al presente decreto.

Parágrafo 3º Mientras se dicta la reglamentación respectiva, tanto el personal del Catastro Nacional como el del Instituto Geográfico de Colombia "Agustín Codazzi" continuarán con las actuales funciones y asignaciones.

Artículo 5º En adelante será obligatorio para todo propietario o arrendatario de predio rural de superficie mayor de 50 hectáreas, utilizar al menos una vez al año en cultivos agrícolas directamente o por medio de arrendatarios o aparceros, una parte de su fundo, ya sea con cultivos de carácter permanente o de corta duración.

Parágrafo. Se considerarán como cultivos los usuales así como las siembras de árboles maderas,

y los cultivos de tardío rendimiento. Los pastos de corte y las praderas mejoradas, técnicamente cultivadas, también se considerarán como cultivo para los fines del artículo 6º del presente decreto, cuando se trate de ganadería intensiva debidamente comprobada.

Artículo 6º La obligación del propietario o arrendatario de que trata el artículo anterior, se hará efectiva a partir del 1º de enero del año siguiente a la clasificación de la región que comprende su predio rural por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, y en la proporción que en seguida se fija para cada propiedad:

a) Para los terrenos del tipo I: un 25% del área;

b) Para los terrenos del tipo II: un 15% del área;

c) En los terrenos del tipo III, que sean ineptos para cultivos agrícolas por razón de estar en selva o sin destroncar, tendrá el propietario la obligación de limpiar anualmente y en forma acumulativa, hasta 10 hectáreas cuando el terreno sea mayor de 50 hectáreas y no exceda de 200 hectáreas, y un 10% de la superficie cuando la propiedad exceda de 200 hectáreas.

d) Los terrenos del tipo IV se mantendrán con pastos, bosques o en reforestación.

Parágrafo 1º Mientras se realiza la clasificación de que trata el artículo 2º de este decreto, las obligaciones de los propietarios o arrendatarios arriba indicadas se harán efectivas en un 10% de la superficie de sus predios rurales para todos los terrenos de los tipos I y II, obligación que empieza a regir a partir del 1º de enero de 1958.

Parágrafo 2º En los predios rurales que comprendan terrenos de los tipos I, II y III el propietario podrá cumplir las obligaciones arriba indicadas cultivando solamente los de más alta clasificación en la extensión que le corresponda a la finca.

Parágrafo 3º Mientras se realiza la clasificación de que trata el artículo 2º, las obligaciones de este artículo no se considerarán aplicables al Departamento del Chocó, a las intendencias ni a las comisarías.

Artículo 7º En las zonas de tipo I, II y III, en las que el Gobierno por medio de cualquier organismo oficial, semioficial, descentralizado u autónomo ejecute obras de irrigación o drenaje que aumenten apreciablemente la capacidad productiva de las tierras y se cause una valorización para los dueños,

el Gobierno podrá aumentar hasta el 50% la obligación de cultivar de que trata el presente artículo, sin limitación por su cabida.

Artículo 8º En los terrenos del Tipo I o II, cuando el predio rural sea mayor de 10 hectáreas y menor de 50, será obligatorio sembrar una hectárea, de preferencia en cultivos de pan coger, o en árboles frutales o en flores y hortalizas con sujeción a las prescripciones higiénicas pertinentes; quedando autorizado el Gobierno para señalar mayor área de cultivos en terrenos aledaños a ciudades de más de 50.000 habitantes.

Artículo 9º Dentro de los seis meses siguientes a la clasificación de su terreno, si el propietario no se conformare a ella tendrá derecho a decisión arbitral en los términos de la Ley 2ª de 1938. Los fallos de los arbitradores deberán rendirse en el término de 30 días.

Artículo 10. En toda propiedad rural mayor de 200 hectáreas se destinará conjunta o separadamente al menos $\frac{1}{2}$ hectárea por familia para que el personal permanente de la misma pueda hacer cultivos de corta duración en su propio beneficio, sin que haya lugar a cobro de arrendamiento y sin obligación de exceder las siguientes superficies totales:

- a) Más de 200 hectáreas hasta 400, 5 hectáreas;
- b) Predios mayores de 400 hectáreas, 10 hectáreas;
- c) Predios mayores de 600 hectáreas, 15 hectáreas;
- d) Predios mayores de 1.000 hectáreas, 20 hectáreas.

Parágrafo 1º Se exceptúan de esta obligación, los predios rurales de cultivos industriales de caña de azúcar y banano.

Parágrafo 2º Los propietarios podrán organizar cooperativas de sus trabajadores para los fines de este artículo.

Parágrafo 3º La destinación gratuita de terrenos para cultivos del personal de las fincas no se tendrá en cuenta en sus salarios ni para la liquidación de prestaciones sociales, ni dará derecho a propiedad del ocupante, ni podrá el trabajador cultivarlo durante la jornada ordinaria de trabajo, con perjuicio de que si lo hiciere perderá el derecho al uso y goce de la parcela.

Parágrafo 4º El trabajador permanente que se retire voluntariamente perderá el derecho a los frutos pendientes; el que sea despedido tendrá derecho a que el propietario le dé tiempo, teniendo en cuenta el ciclo de las cosechas, para recolectar los frutos pendientes o se los pagará por su valor de conformidad con lo previsto en el artículo 27.

Artículo 11. Todo propietario o arrendatario de predio rural de superficie mayor de 50 hectáreas estará en la obligación de relacionar, por una sola vez y junto con su declaración de renta y patrimonio correspondiente al año de 1957, la cabida aproximada de su fundo, con indicación de los porcentajes de terrenos de los tipos I, II, III y IV que lo componen a su juicio.

Parágrafo. Para los propietarios o arrendatarios que no hagan la declaración a debido tiempo, la Administración de Hacienda Nacional clasificará la totalidad del predio como tipo I, clasificación que continuará vigente con las obligaciones que ella acarrea, hasta tanto el instituto haga la clasificación que realmente le corresponda.

Artículo 12. A partir del año gravable de 1958, los contribuyentes relacionarán en su declaración anual de renta y patrimonio las áreas cultivadas en los predios rurales que posean o tengan en arrendamiento y cuya cabida sea superior a 50 hectáreas.

Parágrafo 1º Para los predios rurales de extensión mayor de 100 hectáreas, el declarante comprobará las áreas cultivadas, con certificaciones que expidan el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, el Instituto de Fomento Algodonero, el Instituto de Fomento Tabacalero, la Corporación de Defensa de Productos Agrícolas, las jefaturas de las secciones agropecuarias departamentales, o los institutos de fomento agrícola que se establezcan en el futuro.

El comité ejecutivo de que trata el artículo 4º de este decreto podrá delegar, en ingenieros agrónomos registrados y aprobados por el comité, la facultad de expedir los certificados a que se refiere este artículo. Tales certificados serán aceptados por la Administración de Hacienda Nacional.

Parágrafo 2º La declaración dolosamente falsa, sobre el área cultivada de que trata este artículo acarreará una sanción equivalente al 100% del gravamen adicional indicado en el artículo 14. Los funcionarios y las personas autorizadas para expedir los certificados a que se refiere el parágrafo anterior, serán solidariamente responsables con el propietario o arrendador en casos de falsa declaración.

Artículo 13. Corresponde a los propietarios de predios rurales el cumplimiento de las obligaciones de este decreto. Se considerará que han dado cumplimiento a dicha obligación en cuanto a la superficie de terrenos que tengan dadas en arrendamiento en pequeñas parcelas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26. Cuando se trate de lotes arrendados superiores a 50 hectáreas, el arrendatario estará obligado a dar cumplimiento a las obligaciones de los artículos 5º, 6º, 7º y 8º del presente decreto y si no lo hiciere, el propietario deberá dar por terminado el respectivo contrato, iniciando juicio de lanzamiento si fuere necesario, sin que esté obligado a ningún pago por razón de mejoras o indemnizaciones.

El propietario deberá comprobar que inició el juicio de lanzamiento si fuere el caso, a fin de no incurrir en las sanciones de que trata el artículo 14, sin perjuicio de que se hagan efectivas dichas sanciones contra el arrendatario hasta tanto haga entrega de la cosa arrendada.

A partir del 1º de enero del año siguiente al recibo del predio arrendado, el propietario estará en la obligación de cumplir lo establecido en este decreto.

Artículo 14. El propietario que por cualquier motivo no cultive anualmente sus terrenos directamente o por medio de arrendatarios o aparceros, en la forma indicada en los artículos 5º, 6º, 7º y 8º de este decreto pagará un impuesto adicional al de la renta y complementarios equivalente al 2% del avalúo catastral de la respectiva propiedad en el año de 1958; 3% en el año de 1959; un 4% en el año de 1960; un 5% en el año de 1961; y un 10% del año de 1962 en adelante. Este impuesto se liquidará conjuntamente con el de la renta y complementarios.

Artículo 15. Quedan exentas de las obligaciones de que tratan los artículos 5º, 6º, 7º y 8º y del gravamen de que trata el artículo anterior, las tierras que no sean aptas para cultivos agrícolas. La ineptitud deberá demostrarse cuando la propiedad sea mayor de 100 hectáreas, en la forma indicada en el párrafo 1º del artículo 12 de este decreto.

Por un término no mayor de dos años quedan también exentas de dichas obligaciones y gravamen las sucesiones ilíquidas en que figuren como herederos hijos menores del causante.

Será considerada como fuerza mayor la inseguridad en el campo causada por motivos de orden pú-

blico en las zonas afectadas que determinen los gobernadores de los departamentos.

En las propiedades menores de 100 hectáreas que sean aptas para la agricultura y con respecto a las cuales sus propietarios hayan hecho la declaración falsa de que no sean aptas para todo cultivo agrícola, el Estado procederá a un avalúo catastral en función de su máxima productividad teórica. Dicho avalúo servirá de base para las sanciones de que trata el artículo 14 de este decreto. El propietario podrá sin embargo obtener, previa su declaración, un certificado sobre la ineptitud de sus tierras, en la forma prevista en el párrafo 1º del artículo 12.

Parágrafo. Quedan también exentas de la obligación y del gravamen de que tratan los artículos 6º y 14 de este decreto, los terrenos que por disposiciones vigentes o reglamentaciones del Gobierno deben permanecer en bosques naturales o deban explotar sus reservas forestales racionalmente.

Artículo 16. Todo propietario de predio rural podrá renunciar por escritura pública, en favor del Estado o de entidades de beneficencia o educacionales que tengan personería jurídica, y sin lugar al pago del impuesto de donaciones, a cualquier porción de su predio.

Artículo 17. A partir de la fecha del presente decreto y hasta el 31 de diciembre de 1962 quedan congelados los avalúos catastrales de todos los predios rurales, excepto lo previsto en el artículo 15 y en el párrafo siguiente, sin perjuicio de que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi proceda a hacer nuevos avalúos de conformidad con la clasificación de las tierras, avalúos que solo entrarán en vigencia a partir del 1º de enero de 1963.

Parágrafo. La anterior disposición no se aplicará a los reavalúos resultante de la conservación catastral ni cuando hecha la clasificación y avalúo de los terrenos por el instituto, ya sea de oficio o a petición del interesado, resulte que el avalúo catastral que actualmente tienen es mayor o menor en un 30% a su verdadero valor. En tales casos las oficinas de catastro notificarán al propietario del nuevo avalúo catastral que les corresponda. En casos de expropiación los interesados tendrán derecho a que se les haga un nuevo avalúo catastral.

Artículo 18. Las inversiones que hagan los contribuyentes a partir del 1º de enero de 1958 en maquinaria agrícola, estarán exentas del impuesto complementario de patrimonio; y las inversiones en

construcciones de cercas, corrales para ganado, divisiones de potreros, bañaderas de ganado, silos, estercoleros, pozos de agua y molinos de viento y represas para bebederos, plantas para suministro de fuerza eléctrica en las fincas y establos para lechería o ganadería, así como en pistas de aterrizaje para avionetas, se considerarán como un gasto deducible de la renta del contribuyente por una sola vez. Los contribuyentes estarán obligados a comprobar dichos gastos cuando así se les exija. El Gobierno queda facultado para hacer extensiva dicha deducción a otras inversiones.

Artículo 19. Con el fin de fomentar la asociación de capitales para la explotación agrícola, las sociedades de cualquier naturaleza inclusive las cooperativas, constituidas legalmente, que posean un patrimonio superior a cien mil pesos (\$ 100.000.00) sin computar el valor de las tierras y que se dediquen exclusivamente a la siembra y recolección de productos agrícolas en tierras de tipo I, o al desarrollo de las industrias pesquera, avícola, porcina, lanar o lechera con ganados de selección comprobados por las asociaciones respectivas en cualquier parte del territorio nacional, o a la cría de ganados en terrenos de los tipos II y III y en las intendencias y comisarías, gozarán de las siguientes exenciones, desde el 1º de enero de 1958 hasta el 31 de diciembre de 1968.

- a) Del 50% del impuesto complementario de patrimonio;
- b) Del impuesto de renta sobre el 50% de la renta líquida obtenida en el año gravable;
- c) Del impuesto complementario del exceso de utilidades.

Se exceptúan las inversiones hechas en cultivos de café, banano y caña de azúcar.

Se entiende por cría de ganados la que tenga no menos del 60% de hembras de cualquier edad; el resto de los semovientes solo podrán ser menores de dos años.

Parágrafo 1º Los socios de las compañías a que este artículo se refiere, gozarán de las mismas exenciones previstas para las sociedades en relación con los respectivos aportes o acciones y participaciones y dividendos.

Parágrafo 2º Las ventas, permutas o enajenaciones de productos agrícolas o pecuarios que se hagan directa o indirectamente a sus socios por parte de

las compañías a que este artículo se refiere, deberán hacerse a un precio estrictamente comercial. En caso contrario tanto la compañía como sus socios perderán el derecho a las exenciones consagradas en este decreto.

Parágrafo 3º Para tener derecho a las exenciones de que trata este artículo, los contribuyentes deberán relacionar, junto con su declaración de renta y patrimonio además de las áreas cultivadas, los rendimientos obtenidos en cada cultivo tanto en volumen de producción como en valor de los mismos, discriminados por productos.

Artículo 20. Las personas naturales que lleven libros de contabilidad debidamente registrados, tendrán derecho a las mismas exenciones consagradas en el artículo 19, siempre que la contabilidad permita establecer claramente las inversiones, rentas y gastos correspondientes exclusivamente a las actividades beneficiadas con la exención.

Artículo 21. A partir del 1º de enero de 1958 los contribuyentes del impuesto de renta y complementarios tendrán derecho a compensar las pérdidas netas sufridas en un año en negocios de agricultura, con rentas obtenidas en años posteriores, dentro de ciclos económicos de cinco años, de acuerdo con la reglamentación que dicte el Gobierno Nacional.

Artículo 22. Las personas naturales o jurídicas que establezcan nuevos cultivos de caucho, cacao, olivos y otras plantas oleaginosas, de carácter permanente, tendrán derecho a deducir de su renta bruta las inversiones que hagan en dichos cultivos, así:

- a) \$ 20.00 por cada árbol sembrado en nuevos cultivos de caucho, no inferiores a 5.000 árboles y con una extensión de 100 o más hectáreas;
- b) \$ 10.00 por cada árbol sembrado, en nuevos cultivos de cacao y olivos no inferiores a 4.000 árboles y con una extensión de 10 o más hectáreas;
- c) \$ 10.00 por cada planta oleaginosa de carácter permanente, en nuevos cultivos no inferiores a 14.000 palmas y con una extensión de 100 o más hectáreas.

Parágrafo. Las deducciones de la renta bruta autorizadas en este artículo solo podrán solicitarse por los contribuyentes cuando se complete el número de árboles o plantas en las extensiones indicadas en los apartes a), b) y c) anteriores y el total de

las deducciones se distribuirá en tres años, así: 50% en el primer año en que formule la solicitud, 25% en el segundo año y 25% en el tercero.

Para adquirir y conservar el derecho a las deducciones será necesario que los árboles o plantas se siembren adecuadamente y que se conserven en buen estado. La realidad de las siembras y la debida conservación podrá comprobarse mediante certificados de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero o de cualquier otro organismo que se establezca para el fomento de estos cultivos.

Las deducciones se limitarán en cada año gravable al número de árboles o plantas que, de acuerdo con las certificaciones que se acompañan a las declaraciones de renta y patrimonio, se hayan conservado en buen estado.

Parágrafo. El Gobierno podrá ampliar a otros cultivos de carácter permanente los beneficios de esta norma y reglamentar sus siembras.

Artículo 23. Las personas naturales o jurídicas que se dediquen a la compra o adquisición de terrenos del tipo III, sean o no baldíos con el fin de convertirlos en tipo I, mejorarlos y parcelarlos, tendrán derecho a las exenciones de que trata el artículo 19 sin limitación por su patrimonio.

Parágrafo. Para gozar de las exenciones de que trata este artículo será condición indispensable que las parcelaciones se efectúen mediante las siguientes condiciones:

a) Que la suma invertida en mejoras sea, por lo menos, de \$ 250.00 por hectárea;

b) Que la cabida mínima de cada parcela sea de 100 hectáreas y la entreguen lista para el cultivo;

c) Que el pago inicial máximo sea de un 30% del valor de la venta;

d) Que se conceda un plazo mínimo de 10 años para el 70% restante, mediante el sistema de amortización gradual.

Artículo 24. Al costo de la construcción por particulares de carreteras de acceso a vías públicas de transporte, aprobadas por el Ministerio de Obras Públicas o por las secretarías departamentales de obras públicas, deberán contribuir los propietarios de predios beneficiados siempre que dichas obras sean aprobadas por las dos terceras partes de los propietarios y que estos representen más de la mi-

tad de la superficie beneficiada, o que sean aprobadas por la mitad de los propietarios siempre que estos representen las dos terceras partes de las tierras beneficiadas.

Las zonas que deban atravesar las carreteras de que trata este artículo, se consideran de utilidad pública para los efectos legales, sujetas al pago de dichas zonas.

Parágrafo 1º Decláranse de utilidad pública las carreteras privadas que atraviesan dos o más predios de distintos dueños. Por lo tanto, los predios colindantes a tales propiedades y que requieran el tránsito por dichas carreteras, para comunicarse con vías públicas de transporte, tendrán derecho al tránsito, pagando a sus actuales dueños una suma proporcional al costo de la obra y obligándose a contribuir a su sostenimiento.

Artículo 25. El costo de la construcción por particulares de carreteras de acceso a vías públicas u obras de irrigación, de drenaje o desecación se considerará como un gasto deducible de la renta, de acuerdo con lo establecido en el artículo 19, aparte b) del Decreto número 270 de 1953.

Artículo 26. En los contratos para el cultivo de tierras que entrañen alguna especie de sociedad o de coparticipación en los productos entre el arrendador o dueño de tierras y el cultivador, tales como los contratos de aparcería, y los conocidos, según la región como de agregados, "poramberos", arrendatarios de parcelas, vivientes, mediasqueros, cosecheros, etc., o que estipulen un arrendamiento en dinero, podrá fijarse cualquier término de duración teniendo en cuenta el ciclo de las cosechas, así como la estipulación de que a la expiración de dicho término los cultivos que estén sin cosechar en la parcela y que hayan sido autorizados en el contrato, pasarán al propietario del terreno previo el pago del valor que tengan, según se fija en el artículo siguiente. Los cultivos y mejoras que estén expresa y específicamente prohibidos en el contrato de arrendamiento pasarán al dueño de la tierra a la expiración del mismo sin pago alguno.

Parágrafo. Los contratos podrán:

a) Prohibir expresa e individualmente cultivos de cualquier naturaleza y la introducción de cualquier clase de mejoras o construcciones, o limitar los cultivos a determinados productos, quedando prohibida cualquier otra siembra;

b) Determinar las épocas de siembra quedando esta prohibida en cualquier otro tiempo;

c) Establecer que en caso de incumplimiento del contrato por parte del arrendatario, el propietario podrá darlo por terminado.

Parágrafo. Las partes deberán autenticar el respectivo contrato ante el notario o juez o el inspector nacional de asuntos campesinos, o el alcalde de la localidad o el más vecino, o el inspector de la Caja de Crédito Agrario, quienes lo harán sin costo alguno e instruirán al arrendatario en las cláusulas del contrato.

Artículo 27. La Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero señalará semestralmente los valores de los cultivos usuales en las diferentes regiones del país, para efectos de la regulación del pago de los cultivos pendientes de recolectar a la terminación de los contratos.

Artículo 28. Quienes cometieren hurto o robo en propiedades rurales o negociaren con artículos provenientes de tales delitos, serán considerados en estado de especial peligrosidad, según lo establecido en los ordinales 19, 23 y 24 del artículo 7º del Decreto ley número 14 de 1955 y serán juzgados por el

procedimiento señalado en dicho decreto, aunque no exista contra ellos comprobación de antecedentes judiciales o policivos. Los responsables serán condenados a colonia agrícola y penal, de dos a siete años.

Artículo 29. El Gobierno queda autorizado para reglamentar este decreto y llenar los vacíos que se presenten en orden a su debido cumplimiento.

Artículo 30. Este decreto suspende las disposiciones que le sean contrarias y regirá desde la fecha de su publicación en el "Diario Oficial".

Comuníquese y publíquese.

Dado en Bogotá, D. E., a 8 de noviembre de 1957.

Mayor General GABRIEL PARIS G.,
Presidente de la Junta.

Mayor General DEOGRACIAS FONSECA

Contraalmirante RUBEN PIEDRAHITA ARANGO

Brigadier General RAFAEL NAVAS PARDO

Brigadier General LUIS E. ORDOSEZ

(Siguen las firmas de los ministros del despacho).

INDICE DE MEDIDAS LEGISLATIVAS Y EJECUTIVAS DE ORDEN ECONOMICO

OCTUBRE DE 1957

CATEGORIA. NUMERO Y FECHA	DIARIO OFICIAL EN QUE SE PROMULGO		TEMA	
	NUMERO	FECHA		
DECRETOS LEGISLATIVOS (1)				
D.l. N° 241-bis	2 Oct. 57	29.517	21 Oct. 57	Autoriza a la Corporación de Defensa de Productos Agrícolas para adquirir de la Distribuidora Venezolana de Azúcar 10.000 toneladas métricas de azúcar refinada.
D.l. N° 243	3 Oct. 57	29.517	21 Oct. 57	Normas para fomento de la producción algodonera: a) Suprime a partir del 1° de enero de 1958 los impuestos sobre consumo de algodón en fibra, de producción nacional e hilazas de algodón importadas de que trata el Decreto 319 de 1949; b) Establece la cuota de fomento sobre consumo de algodón e hilaza en los siguientes términos: tres centavos por kilogramo de algodón fibra que utilicen las fábricas textiles del país, y diez centavos por cada kilogramo que se importe; c) dispone que la cuota sobre las importaciones de esta materia deberá consignarse en el Banco de la República, y dicta otras medidas para hacer efectivas estas disposiciones.
D.l. N° 244	3 Oct. 57	29.517	21 Oct. 57	Disposiciones sobre crédito pecuario: a) Faculta a los bancos comerciales para descontar los documentos negociables a favor de los fondos ganaderos sobre operaciones de venta de ganado con pacto de retroventa o bajo cláusula de reserva de dominio, pudiendo aplicar estas operaciones a las autorizadas por el Decreto legislativo 198 de 1957 y redescontarlas en el Banco de la República; b) Modifica el Decreto legislativo 157 del año en curso al disponer que el Banco Ganadero deberá mantener una suma no inferior al 50% de su capital y reserva legal y al 3% de sus depósitos, en descuentos a fondos ganaderos; c) Establece que, con excepción de los Llanos Orientales, las sumas que se obtengan de multas causadas por mala imposición de marcas, serán recaudadas por los fondos ganaderos, los cuales expedirán acciones de clase "A" en favor de los respectivos municipios en donde se hayan ocasionado, y d) Sanciona con la pérdida del derecho a redescuento por dos años, a los prestatarios que no apliquen los préstamos a los fines para que fueron solicitados.
D.l. N° 246	3 Oct. 57	29.517	21 Oct. 57	Dispone que las personas naturales o jurídicas y las sucesiones ilíquidas que hubieren omitido en sus declaraciones de renta y patrimonio correspondientes a los años gravables de 1956 y anteriores, divisas u otros bienes poseídos en el exterior, podrán importarlos al país e incluir dichos bienes o divisas, o el producto de su venta, en las declaraciones de renta y patrimonio de 1957, sin que en tales casos se aplique sanción alguna por inexactitud o falta de declaración, sin que haya lugar a determinar la renta por el sistema de comparación de patrimonios, ni a efectuar las revisiones previstas en la Ley 81 de 1931; determina los requisitos que deben llenarse para tales declaraciones; exige un certificado del Banco de la República para los casos en que se hayan importado divisas en los términos del Decreto 2929 de 1956; establece la manera de probar la importación al país, de tales bienes, y los exime de gravámenes complementarios.
D.l. N° 248	9 Oct. 57	29.517	21 Oct. 57	Autoriza la acuñación y emisión de monedas en las denominaciones de \$ 0.01, \$ 0.02, \$ 0.05, \$ 0.10, \$ 0.20 y \$ 0.50, hasta por la suma de \$ 20.000.000; faculta al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para que previo acuerdo con la Junta Directiva del Banco de la República, determine las características de tales monedas; establece que además de las funciones señaladas en el artículo segundo del Decreto 756 de 1951, la Junta Directiva del Instituto Emisor, con el voto favorable de no menos de 7 de sus miembros, incluyendo al Ministro de Hacienda, podrá modificar el encaje de los billetes en circulación y de sus depósitos.
D.l. N° 249	9 Oct. 57	29.517	21 Oct. 57	Dicta normas sobre el funcionamiento, clasificación y organización de cajas de compensación para el subsidio familiar.
D.l. N° 256	22 Oct. 57	29.547	28 Nov. 57	Exime del impuesto de giros, establecido por el Decreto legislativo 107 de 1957, las importaciones de petróleo crudo que se efectúen con destino a la refinería de Cartagena.
D.l. N° 260	22 Oct. 57	29.548	29 Nov. 57	Interpreta el artículo 5° de la Ley 93 de 1938, en el sentido de que la inspección y vigilancia del Gobierno Nacional en las instituciones de utilidad común que se originan en actos administrativos y reciben auxilios del tesoro nacional, se concreta únicamente a verificar que el producto de tales auxilios ingrese a ellas y se aplique a los fines para los que fueron creadas.
D.l. N° 261	22 Oct. 57	29.548	29 Nov. 57	Organiza un centro de colonización en la región del río Magdalena, jurisdicción del departamento de Antioquia; determina la manera de financiarlo; crea una junta directiva para llevar adelante tal proyecto y dicta otras normas relacionadas con el mismo fin.
D.l. N° 264	22 Oct. 57	29.548	29 Nov. 57	Modifica el Decreto legislativo 197 de 1957 que organizó el "Servicio Nacional de Asistencia Social", en lo referente a la dirección y administración.
D.l. N° 265	23 Oct. 57	29.548	29 Nov. 57	Amplía el Decreto legislativo 215 de 1957, al centralizar en Bogotá y bajo la vigilancia y responsabilidad del Departamento de Presupuesto y Contabilidad del Ministerio de Relaciones Exteriores, todos los pagos que el Gobierno necesite realizar en el exterior.
D.l. N° 268	23 Oct. 57	29.549	30 Nov. 57	Modifica el Decreto legislativo 29 de 1957, que adoptó medidas sobre reconstrucción, ampliación y administración del acueducto de Buenaventura, al establecer cómo debe financiarse tal obra.

ABREVIATURAS: D.l.: Decretos legislativos.

(1) Decretos extraordinarios dictados en uso de las facultades conferidas por el artículo 121 de la Constitución Nacional.

OCTUBRE DE 1957

CATEGORIA, NUMERO Y FECHA	DIARIO OFICIAL EN QUE SE PROMULGO		TEMA	
	NUMERO	FECHA		
DECRETOS LEGISLATIVOS (1)				
D.L. N° 269	23 Oct. 57	29.549	30 Nov. 57	Modifica el Decreto legislativo 35 de 1957, al disponer que el Instituto de Crédito Territorial prestará el 10% de los auxilios o aportes del Estado, que reciba cada mes, a la Caja de Vivienda Militar con un interés del 3% y amortización gradual de 20 años.
D.L. N° 270	23 Oct. 57	29.500	2 Dic. 57	Dispone que, a partir del presente decreto, el Instituto de Fomento Municipal, creado por Decreto legislativo 94 de 1957, se denominará Instituto Nacional de Fomento Municipal, y continuará funcionando como entidad autónoma de servicio público descentralizado, con personería jurídica y patrimonio propio; determina que el Instituto tendrá por objeto resolver los problemas sanitarios de saneamiento y alcantarillado de todas las poblaciones y zonas rurales; establece cómo los municipios, de acuerdo con su presupuesto, deben reembolsar al Instituto el valor de las obras realizadas por éste; fija las obligaciones que deben cumplir los municipios para gozar de los servicios de la institución mencionada; determina el patrimonio, rentas y recursos de que dispondrá el Instituto para adelantar sus planes; lo exime de toda clase de impuestos, y dicta otras medidas sobre integración de la junta directiva y funciones del gerente.
D.L. N° 272	29 Oct. 57	29.551	3 Dic. 57	Autoriza al Gobierno Nacional para organizar una sociedad anónima que se denominará "Empresa Colombiana de Turismo, S. A.", con el objeto de impulsar la industria del turismo; fija su capital en \$ 20.000.000 que será suscrito y pagado por el Gobierno, las entidades oficiales y semificiales, los departamentos, los municipios y las personas que deseen adquirir dichas acciones; dispone cómo estará integrada su junta directiva; la exime de impuesto de renta y complementarios, lo mismo que a sus acciones; establece a partir del 1º de enero de 1958 un impuesto equivalente al 5% de las tarifas hoteleras autorizadas, cuando sean o excedan de \$ 10.00. El nuevo gravamen se cobrará también a los pasajes internacionales; fija los requisitos que deben llenar las empresas o agencias de turismo ya establecidas, para su funcionamiento; exime por 10 años de impuestos sobre la renta y complementarios las inversiones que se hagan en construcción de nuevos hoteles, cuando excedan de \$ 500.000.00; iguales ventajas concede a las ya efectuadas cuando inviertan en acciones de la "Empresa Nacional de Turismo" hasta el 50% del valor de la exención, y dicta otras medidas para hacer efectivo este decreto.
D.L. N° 273	30 Oct. 57	29.551	3 Dic. 57	Autoriza al municipio de Pereira para organizar uno o varios servicios municipales, aislada o conjuntamente, como entidades autónomas, con patrimonio propio y personería jurídica independiente.
D.L. N° 276	30 Oct. 57	29.551	3 Dic. 57	Modifica el Decreto legislativo 3640, orgánico del Distrito Especial de Bogotá, al determinar las funciones que debe adelantar el personero del Distrito antes citado.
D.L. N° 278	30 Oct. 57	29.551	3 Dic. 57	Añade los cómputos líquidos del Presupuesto Nacional para 1957 con la cantidad de \$ 2.000.000, proveniente de rentas ocasionales, y autoriza al Gobierno Nacional para invertirla en la campaña que adelanta el Distrito Especial de Bogotá, para el abaratamiento del costo de la vida.
D.L. N° 279	30 Oct. 57	29.551	3 Dic. 57	Añade los cómputos líquidos del Presupuesto Nacional para 1957 con la cantidad de \$ 387.437.27, proveniente de los recursos del balance del tesoro.
D.L. N° 281	30 Oct. 57	29.552	4 Dic. 57	Establece la forma de fijar la proporción que cada exportador debe cubrir en cumplimiento del convenio de Regulación de Exportaciones, celebrado en México; determina la manera de efectuar los reajustes en caso de modificaciones al convenio citado; dispone que la Federación Nacional de Cafeteros podrá ceder de su propia cuota, las cantidades que estime convenientes, a los exportadores que agotaren las que les corresponde; prohíbe a personas distintas de las señaladas en este decreto exportar café colombiano; sanciona con la cancelación de las licencias de exportación por 5 años a quienes excedan la cuota fijada, y faculta a la Federación para efectuar la retención del 10% de café colombiano a que se refiere el Convenio.
D.L. N° 282	31 Oct. 57	29.552	4 Dic. 57	Disposiciones relacionadas con la Corporación Autónoma Regional del Cauca: a) Faculta al Instituto de Aprovechamiento de Aguas y Fomento Eléctrico, para ceder a la Corporación Autónoma Regional del Cauca, como aporte de la nación, la totalidad del interés social que tiene en la sociedad Central Hidroeléctrica del Río Anchicaya, Limitada; b) Dispone que, en caso de disolución de la Corporación, los derechos cedidos revertirán al Instituto; c) Determina la forma como el Gobierno Nacional amortizará la deuda del Instituto de Aprovechamiento de Aguas y Fomento Eléctrico con el Fondo de Estabilización, por este concepto; d) Modifica el Decreto legislativo 160 de 1956, al disponer que el aumento del impuesto por él establecido solo podrá ser cobrado en el futuro por los municipios del Valle del Cauca y del Cauca; e) Exime, a partir del 1º de octubre de 1958, del pago del aumento del impuesto predial creado por el Decreto legislativo 160 de 1956 a las personas cuyo patrimonio no exceda de \$ 50.000.00; f) Autoriza a la Corporación para emitir bonos de un valor nominal de \$ 10.00 y para entregarlos, a opción de los contribuyentes de predios rurales, por el valor de sobre impuesto siempre que su pago se haga dentro del plazo fijado; g) Establece que, el impuesto que se cobre por obras que realice la Corporación podrá pagarse en bonos, en cuantía no inferior al 30% ni superior al 60%, y dicta otras medidas tendientes a hacer efectivas estas disposiciones.

ABREVIATURAS: D.L.: Decretos legislativos.

(1) Decretos extraordinarios dictados en uso de las facultades con feridas por el artículo 121 de la Constitución Nacional.

INDICE DE MEDIDAS LEGISLATIVAS Y EJECUTIVAS DE ORDEN ECONOMICO

OCTUBRE DE 1957

CATEGORIA. NUMERO Y FECHA	DIARIO OFICIAL EN QUE SE PROMULGO		TEMA	
	NUMERO	FECHA		
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO				
D. N° 2094	11 Oct. 57	29.532	9 Nov. 57	Amplía a tres el número de los miembros que integran la Comisión Revisora del Arancel de Aduanas.
D. N° 2120	16 Oct. 57	29.542	22 Nov. 57	Adiciona los cómputos liquidados del Presupuesto Nacional para 1957 con la cantidad de \$ 16.825.00, proveniente de rentas ocasionales.
R. N° 2663	21 Oct. 57	(—)	(—)	Aprueba la resolución de la Junta Directiva del Banco de la República dictada el 9 de octubre del año en curso, por la cual se eleva la suma mensual destinada al pago de la prima minera a los pequeños productores de oro, y se toman otras medidas sobre la materia.
Jefatura de Rentas e Impuestos Nacionales				
R. R-62-E	15 Oct. 57	29.538	18 Nov. 57	Fija los precios de las acciones de sociedades anónimas no inscritas en bolsas de valores, para efectos de la liquidación y recaudo del impuesto de Fondo Escolar Nacional.
R. R-66-E	29 Oct. 57	29.545	26 Nov. 57	Fija los precios de las acciones de sociedades anónimas inscritas en bolsas de valores, para efectos de la liquidación y recaudo del impuesto de Fondo Escolar Nacional.
MINISTERIO DE FOMENTO				
D. N° 2175	25 Oct. 57	29.544	25 Nov. 57	Suspende a partir del 25 de octubre de 1957, la exportación de chatarra de hierro, cobre, acero, aluminio, zinc y bronce; autoriza al Ministerio de Fomento para fijar los precios mínimos de dichos productos en las diferentes ciudades del país y para reglamentar la absorción obligatoria por parte de las industrias.
D. N° 2226	31 Oct. 57	29.544	25 Nov. 57	Aprueba el acuerdo número 3 de agosto 23 de 1957, por el cual el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Cauca reformó los estatutos de la citada Corporación, en lo relacionado con la integración del Consejo Directivo, el periodo de sus miembros, la manera de renovarlos y la forma de preparar el plan de desarrollo de la región.
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS				
D. N° 2006	1° Oct. 57	29.534	13 Nov. 57	Dispone que a partir del presente decreto las Embarcaderías Oficiales de Barranquilla, Cartagena y Buenaventura, dependerán de la Administración de los Terminales marítimos de los puertos citados.
D. N° 2037	4 Oct. 57	29.534	13 Nov. 57	Autoriza al Ministerio de Obras Públicas, Dirección General de Navegación y Puertos, para destinar la suma de \$ 200.000.00, a la construcción de viviendas para obreros que trabajan al servicio del terminal marítimo de Buenaventura, en condiciones de casas fiscales, con bajo cánón de arrendamiento.
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL				
D. N° 2031	2 Oct. 57	29.534	13 Nov. 57	Con el objeto de hacer efectiva la obligatoriedad de la educación primaria, crea las escuelas alternas para grupos distintos de escolares en las escuelas públicas primarias oficiales del país donde las cifras de matrícula lo hagan necesario, y dicta otras medidas tendientes a hacer efectiva su organización y funcionamiento.
SUPERINTENDENCIA BANCARIA				
R. N° 213	17 Oct. 57	(—)	(—)	Aprueba la Resolución 1 de 1957, emanada de la asamblea general de accionistas del Banco de Salamina, por la cual se decretó la disolución y liquidación de la mencionada entidad y se autorizó, ad referendum, el traspaso del edificio y las acciones que el Banco de Salamina poseía en el Instituto Emisor.
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE IMPORTACIONES				
R. N° 1	3 Oct. 57	(—)	(—)	En ejercicio de las facultades que le confieren los Decretos 115 y 1530 de 1957, establece como requisito indispensable para la presentación a la Superintendencia Nacional de Importaciones de los registros sometidos a licencia previa, la consignación en el Banco de la República del depósito provisional.
BANCO DE LA REPUBLICA (1)				
R. N° 17	4 Oct. 57	(—)	(—)	Dispone que las importaciones de bienes de capital y sus repuestos, no destinados al comercio, efectuadas por entidades oficiales, semioficiales o de servicio público están exentas del depósito de garantía, previa autorización en cada caso, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y establece que las importaciones de papel realizadas por empresas periodísticas continuarán gozando del depósito previo del 20%.

ABREVIATURAS: D.: Decreto. — R.: Resolución. — (—): No se ha publicado en el Diario Oficial.

(1) Resolución dictada en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto legislativo 232 de 1957.